

¿Qué universidad?

(Publicado en noviembre de 2001, con motivo del debate de la LOU)

José Luis Gómez Urdáñez

La universidad napoleónica o la bismarkiana lograron lo que no había logrado nadie, ni los reyes absolutos, ni los déspotas ilustrados, ...ni los jesuitas: poner a trabajar a los universitarios en una misma dirección. En la pobre España decimonónica, el régimen liberal también utilizó la universidad para reclutar las mejores cabezas y ponerlas al servicio del *Estado locomotora*, la garantía del progreso: el positivismo como lema y la ciencia pura, la de los resultados aplicables, como único *Dios*. Nada de discusiones inútiles, lo que la universidad tenía que hacer era formar médicos, abogados e ingenieros. Para ello, el Estado no escatimaría medios, pero sería exigente: lo controlaría todo. Nació la *universidad nacional*.

La vieja fórmula ha seguido funcionando en la Europa del siglo XX porque el *Estado del bienestar* le añadió una filigrana en la vertiente social que contentó a unos cuantos ilusos, también en España, adonde el invento llegó tarde, a fines de los sesenta, más o menos bendecido –recordemos la filosofía caritativa del PIO–, y permitió acceder al coto universitario a unos cuantos hijos de pobre. Se quitó presión a la olla social, pero, para la minoría *despierta*, se trataba sólo de un truco cuyo objetivo era desviar la atención de la verdadera constitución de la universidad, como siempre, clasista y controlada, o sea, *nacional*. En el fondo, la universidad seguía siendo *la de ellos*, la que mantenía el status de la clase dominante y transmitía el poder de padres a hijos.

Tras el descontrol del franquismo terminal, llegamos a la universidad de hoy, la que podríamos llamar *universidad popular*, es decir, aquella institución del Estado social y democrático que sirve al pueblo, y que ha devenido en el instrumento máspreciado de ascenso social de las clases bajas. La universidad popular, sin embargo, no podía subsistir sola. Necesitaba hacer un sitio, aunque sólo fuera para *aggiornarse* con la europea, a las *universidades* que la evolución científica había decantado, al menos a la *universidad productora de ciencia* y a la *formadora de profesionales* de sectores nuevos y estratégicos. También hubo hueco para la *universidad del gentlemen*, de lo que se ocuparían las privadas, y se mantuvo un cierto regusto cuartelero (o frailuno) interno –catedráticos con mando en plaza, por ejemplo– para contentar a las jerarquías nostálgicas de la finiquitada universidad nacional. Así, la universidad, además de democratizarse, pudo ser *todas las universidades*, el gran logro que afianzaría férreamente la LRU, la clave de su éxito.

Producto emblemático de la política socialista, timorata en unas cosas y aventurera en otras, la universidad de la LRU se ha caracterizado por dar cabida a todo y a todos –

hasta la gimnasia tiene ya doctores: y no se me enfaden—. Por haber, caben —y esto es el colmo— incluso los incumplimientos de la propia ley (las viejas facultades han resistido, los departamentos son una filfa, los asociados son lo contrario de lo legislado, etc.). Parecía al principio que la ley sería de coyuntura, una solución balsámica para asuntos viejos insolubles —el cachondeo legal de la idoneidad, por ejemplo—, tal era su zafiedad; sin embargo, ahora que termina el ciclo, se empieza a percibir que lo importante no estaba escrito: la ley más progresista de la historia de la universidad española, la detestada LRU, va a dejar una profunda y duradera huella *ideológica*.

Y es que, con sus muchos defectos, el *régimen universitario* vigente es el que ha producido más satisfacciones y en más ámbitos: en el de la investigación, en el de la estabilidad interna, en el de la calidad de la enseñanza, en el del impacto social externo, en el de la promoción del profesorado. Casi podríamos decir que ha contentado a todos y en todo, aunque proliferen ahora las quejas de algunos bocazas que deberían sonrojarse recordando —currículum en mano— lo que deben a la ley que dicen detestar. Qué hubiera sido de ellos si no se hubiera abierto la mano que ellos quieren ahora cerrar.

En esta *conjunción de todas las universidades*, cada uno ha podido encontrar su apaño: el científico, su probeta o su manuscrito; el docente, su didáctica y sus experiencias de aula; incluso el sindicalista tiene campo donde pastar, y triunfan los *nacidos para mandar* (los que no pueden vivir sin un cargo). Todos son igualmente necesarios. Gracias a este igualitarismo inusitado y a que se blindaron algunos espacios protegidos —una cierta seguridad para que el dócil aprendiz tuviera futuro (a eso le llaman ahora endogamia)—, la universidad donde *cada uno podía ser lo que quisiera* ha ofrecido excelentes resultados.

En el campo de la creación de ciencia, hoy no tenemos nada que envidiar a los colegas europeos, que, como nosotros, sólo piden más dinero y un poquito de comprensión de los políticos jumentos que no nos entienden. Las cifras permiten hablar de una verdadera revolución científica en la universidad española, pero hay algo que no son cifras ni sólo *ciencias*: probablemente, nunca la universidad ha impactado la cultura española como en este último periodo. Y no sólo la cultura capitalina, la que más se ve. Es precisamente la labor de la universidad *provincial* la más encomiable, pues ha permitido un cambio cultural notable en las pequeñas ciudades españolas, hasta ahora abandonadas a la voracidad analfabeta de eruditos locales y otras rapaces (algunas con nido y pienso en la propia universidad, a la que traicionan cada día). El impacto de la universidad *provincial*, conseguido a veces a sangre y fuego, contrasta hoy con la burricie de los acólitos autonómicos de los reformadores, preocupados sólo por el *control político* de su universidad que quisieran siempre más apueblerinada. Como se les nota, obstaculizan todavía más la reforma que pretende el gobierno.

En cuanto a la estabilidad interna de la institución, hay un hecho demostrable: a pesar de lo que digan algunos jeremías, el nivel de consenso y entendimiento entre gente tan enfurruñada como los universitarios —esto es así en toda la vieja Europa— ha sido notable en el último periodo. Se debe sin duda a la articulación de diversos órganos

decisorios, a la alta tasa de representación de todos los sectores y a la defensa a ultranza de la autonomía universitaria, un logro este último –nada menos que sacar a los políticos de la universidad– que seguramente no tiene parangón en la historia. Es cierto que a veces la representatividad era excesiva –un administrativo o un estudiante primerizo en medio de una discusión sobre un proyecto de fisión nuclear, por ejemplo–, pero no está mal que los dioses se acostumbren a bajar al mundo. Y tampoco que la universidad proyecte esa imagen de *comunidad de hombres virtuosos*, todos necesarios, desde el conserje o el aprendiz al emérito: todos ganamos mucho y el que pierde, pierde poco. Además, puede ser un eficaz mecanismo de defensa contra agresiones externas (como está ocurriendo contra la reforma actual).

Hay muchos más campos en los que la universidad puede presentarse exitosa científicamente y consolidada socialmente, sin embargo, en los últimos tiempos se ha convertido en blanco de todas las invectivas. Es tanto lo que esta universidad ha dado a la España democrática, civilizada y europea, que a muchos universitarios nos asombra el trato vejatorio proveniente del gobierno. Más si cabe, cuando al propio gobierno no le ha hecho falta cambiar la ley para obtener de esta universidad sumisa y polifacética –tal versatilidad le dio la LRU– lo que ha querido: desde élites gubernamentales –los propios ministros, universitarios *engagées*– hasta floreros culturales en provincias a bajo precio, pasando por proyectos de *interés general* gratis, universidades privadas sin control y titulaciones digamos socialmente interesantes, es decir, baratitas, de las de pizarra y pupitre. Y, como no, quietud, mucha quietud, ...¡y pocas becas y sueldos congelados!

Con todo y eso, el gobierno no está contento. Es comprensible que no le gusten ciertos resabios de la universidad popular, que deteste la LRU como una ley general de beneficencia –en realidad fue algo así–, incluso que quiera más control sobre la universidad. Pero no se puede entender que, a estas alturas de consolidación de la *universidad popular*, la ley recuerde tanto a la vieja *universidad nacional*, con sus prusianismos indisimulados –ataque insensato a los rectores incluido–, como si no se hubiera querido ni evitar provocaciones.

Mal lo tiene el gobierno. No parece que cuente con que esta reforma la han de aplicar los universitarios, por lo que: o no sabe qué universidad tiene o no sabe qué universidad quiere.